



Woodrow Wilson  
International  
Center  
for Scholars

*Latin American Program*

**Prepared for the conference**

**“Common Crime and Organized Crime in Latin American Cities:**

**Commonalities and Differences”**

**Woodrow Wilson International Center for Scholars**

**Washington, D.C.**

**May 19, 2010**

**Resumen**

**El aumento del crimen en América Latina: crimen organizado, mercados ilegales y Estados que fallan**

Marcelo Bergman

América Latina se encuentra en medio de una ola de crimen que muestra claros signos de deterioro. En los últimos 25 años, las tasas de crímenes violentos han crecido de manera significativa en la mayoría de ciudades; y el crimen contra la propiedad se ha, por lo menos, duplicado. La mayoría de habitantes de la región han sido victimizados en los últimos cinco años y las protestas públicas han aumentado debido al poco éxito de los Estados en la lucha contra la inseguridad ciudadana. No obstante, parece no haber teorías relevantes que expliquen esta situación. Si bien Marcelo Bergman reconoce esfuerzos importantes que han buscado integrar diferentes dimensiones del crimen y la seguridad, hay una pregunta clave que aún no ha sido respondida de manera integral: ¿Qué ha sucedido, desde 1980, que ha llevado a tal explosión de violencia y crimen en la región?

Para el autor, el aumento del crimen en América Latina es el resultado de diferentes transformaciones sociales y económicas que afectan a la región desde comienzos de la década de los ochenta. Éstas, a su vez, le han abierto paso a nuevos mercados de bienes ilegales abastecidos por organizaciones criminales en proceso de expansión. Se trata de mercados que recurren al crimen, a la corrupción y a la violencia para responder a la creciente demanda de bienes a bajos precios. Esta situación generó una espiral de violencia que los Estados latinoamericanos, de múltiples reformas e iniciativas, no han sido capaces de contrarrestar ni controlar. Actuaron errática y tímidamente; además, bastante tarde, cuando los delincuentes ya habían inclinado la balanza a su favor.

En la primera parte de su artículo, Marcelo Bergman, describe lo que ha sucedido en la región durante los últimos 25 años con relación a los crímenes contra la propiedad y los crímenes violentos. Para ello analiza y compara, en la medida de lo posible y con las dificultades del caso, cifras y tasas de criminalidad y victimización de diferentes países latinoamericanos. Encuentra, entonces, que a pesar de que es difícil establecer un patrón uniforme, las diferentes fuentes de información muestran que la criminalidad ha aumentado —y continúa haciéndolo— de forma significativa. También que si bien las tasas de homicidios muestran tendencias decrecientes, los crímenes contra la propiedad tienden a aumentar. Así, sostiene el autor, la ola de crimen se debe, fundamentalmente a l crimen contra la propiedad. Y en este escenario violencia ha sido la consecuencia y no la causa. Por otro lado, la información reunida refleja una situación que no se circunscribe solamente a algunos países, sino que se trata de un problema de alcance regional.

En la segunda parte del documento Bergman presenta los componentes principales de la criminalidad en la región y describe cómo la demanda de bienes ha afectado a los mercados de economías empobrecidas. También menciona cómo los cambios tecnológicos han facilitado el surgimiento de mercados ilegales.

El autor comienza por exponer diferentes teorías que han intentado explicar el aumento de la criminalidad en América Latina. Primero, hace referencia a aquella que propone, sutilmente, que el tránsito a la democracia ha tenido efectos secundarios. Por ejemplo, en los nuevos regímenes, las agencias policiales y las diferentes fuerzas del orden ya no tienen carta blanca cuando se trata de reprimir. Por lo tanto, los delincuentes se sienten menos amenazados y, en consecuencia, el crimen aumenta. Bergman admite que hay algo de cierto en esta teoría, sin embargo, piensa que no es una explicación integral. Otra línea de argumentación, también con relación a la emergencia de nuevos regímenes democráticos, establece que el crimen violento aumenta cuando la capacidad de los estados de controlar el monopolio de la seguridad se quiebra. Antes, los funcionarios públicos y la policía habían generado un aparato de protección para las actividades ilícitas a cambio de “paz”.

El autor no rechaza estos argumentos. No obstante, señala que dejar muchos cabos sueltos. No explica por qué emergen nuevos actores, que van complejizando el escenario. El factor político sería, entonces, solamente una de variables explicativas.

Bergman sostiene que el aumento del crimen es una respuesta a las transformaciones masivas que ha sufrido la región desde la década del ochenta, cuando estallaron las crisis fiscales en la región. En esos años el empleo formal empezó a caer y los sindicatos y las organizaciones sociales estructuradas fueron desapareciendo. Mientras, los gobiernos democráticos encontraron nuevas formas de lograr legitimidad política, promocionando políticas para aumentar el consumo. En los años noventa trajo hubo una ola de inversión nacional e internacional, que se tradujo en un aumento del consumo entre las clases medias. Por su lado, los sectores marginales encontraron, también, en el consumismo una posibilidad de inclusión, de ciudadanía.

Se produce, entonces, una particular mezcla resultado de la poca capacidad de los estados para disuadir el crimen y el apetito por un consumo voraz que condujo al surgimiento de grupos dispuestos a responder a la nueva demanda generando nuevos mercados. Así, el aumento del crimen organizado se debería, en gran medida, a la organización de mercados ilegales.

Ahora es importante hacer un paréntesis para definir el crimen organizado. Primero, el autor señala que el crimen organizado en América Latina tiene que ver, por lo general, con pequeños y medianos mercados que comercian con bienes ilegales. Luego, retoma a la definición de Fickenaer quien lo define como redes de delincuentes que se juntan alrededor de ciertas oportunidades criminales. Explotan el intercambio ilegal para obtener ganancias económicas. Estos grupos suelen algún nivel de estructuración y continuidad; y están dispuestos a usar la coerción, la violencia y la corrupción.

Volviendo al tema del consumo, el autor sostiene que los nuevos consumidores —empobrecidos—demandan productos a precios muy bajos, tan bajos que sólo los podrían resultar de actividades ilegales. Por supuesto, se debe señalar que ofrecer bienes a precios tan bajos es posible solamente en la medida el costo de involucrarse en este tipo de actividades sea muy baja. Algo, efectivamente, cierto pues, dada la precaria situación de las fuerzas del orden las posibilidades de castigo son escasas.

Para entender la proliferación de estos grupos y mercados, es necesario —e importante—, también tomar en cuenta dos factores: las nuevas tecnologías y la caída de las barreras comerciales, que generaron muchos bienes a bajo costo. A ello habría que agregarle, la reducción de las tasas de interés y la expansión del crédito que contribuyen a la emergencia de nuevos consumidores. Estos cambios han, no obstante, han creado nuevos mercados que el crimen organizado capturó (y abasteció) rápidamente. Se trata de mercados desorganizados abastecido por muchos grupos pequeños y flexibles, que han logrado que los bienes robados se conviertan en industria grande y competitiva.

En la tercera parte de su documento, Bergman analiza la reacción de los estados. Como hemos mencionado, transición a la democracia y la descentralización afectaron la capacidad de prevención de los estados. Al parecer, la devolución de atribuciones a los gobiernos locales — pobres— instituciones ha disminuido la capacidad de prevención.

Dijimos también que los mercados ilegales aparecen, entre otras cosas, en la medida en que involucrarse en actividades criminales no significa un gran costo. El autor propone cuatro razones para ello: i) la caída del precio de la mano de obra y gran número de jóvenes marginales, que crea un espacio de reclutamiento a bajo costo; ii) redes de corrupción que permiten la proliferación de organizaciones criminales eficientes; iii) con las nuevas democracias, bajaron los niveles de prevención bajaron; y iv) la escasa capacidad de los estados para hacer cumplir la ley y la descentralización de la seguridad, que facilita el soborno y la corrupción de las instituciones.

Un aspecto clave en este punto es la descentralización de la policía. Para el autor es claro que la devolución a los gobiernos locales o regionales de ciertos poderes es una variable importante para entender el deterioro de la seguridad en el continente. El hecho de que estos gobiernos, a la par de las nuevas atribuciones, no recibiera equipos y preparación adecuada; además de los altos niveles de corrupción en su interior, no llegaban a representar una amenaza real para las organizaciones criminales.

Ahora esto no quiere decir que en los regímenes autoritarios no existiera el crimen organizado. Lo que sucedía es que estaban limitados por un aparato que no estaba dispuesto a tolerar que el orden público, por lo menos un nivel aceptable, se viera comprometido. Cuando se perdió el equilibrio mantenido por estas autoridades, las organizaciones criminales, comenzaron a expandir sus actividades. Además, durante la década del noventa, las agencias policiales toleran crímenes comunes y crímenes contra la propiedad a cambio de “rentas” y de una “paz moderada”. Pero no se restablece el equilibrio, con lo que los grupos criminales se vuelven, también, más violentos y, básicamente, incontrolables. Para lograr sus objetivos, estos grupos solo necesitan “capturar” algunas cortes y cuerpos de policía.

El equilibrio del que hablamos funciona de la siguiente manera. En donde la criminalidad es alta, las instituciones no han podido controlar la situación, con lo que estalla el espiral de violencia creciera. Sin embargo, cuando criminalidad es moderada o baja, las agencias policiales han sido capaces de responder al problema de manera efectiva. Cuando el equilibrio se quiebra y la criminalidad se desata, es difícil de revertir. El autor concluye acá que cuando el crimen es moderado, una policía deficiente puede controlarlo; pero cuando es alto, es la misma institución que hace colapsar la situación.

Para terminar, el autor nos advierte que este documento es una suerte de hoja de ruta para entender y, al mismo tiempo, explicar el aumento del crimen en América Latina, pero que quedan aún preguntas por responder. Entre ellas, si es que las cifras corroboran el punto de vista del autor para cada uno de los países de la región; y, por otro lado, cuál sería el rol o las particularidades de cada país.

Por último, el autor sostiene que se necesita más evidencia para poder comprobar la estrecha conexión entre la demanda creciente de bienes baratos e ilegales y la organización de mercados ilegales para abastecerlos. Se trata, entonces, de un reto pendiente, por lo menos, hasta que se cuente con la información pertinente que permita explicar estas hipótesis.